



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN**

Carrera 4ª No. 2-18 FAX (092)8209563  
 Email: [j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**Ciudad y fecha:** Popayán, veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015)

**EXPEDIENTE:** 19001 3333 008 2015 00216 00  
**ACCIONANTE:** PEDRO HERNANDEZ CASTILLO Y OTRO  
**DEMANDADO:** UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
**ACCIÓN:** TUTELA

**SENTENCIA No. 124**

**1.- Antecedentes**

**1.1.- La Demanda y su trámite**

El señor **PEDRO HERNÁNDEZ CASTILLO**, Representante Legal de la **ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS – ASPU**, en coadyuvancia con la docente **GLORIA CECILIA ARBOLEDA** presentan acción de tutela contra la **UNIVERSIDAD DEL CAUCA**, con el fin de que le sean amparados los derechos fundamentales de asociación, libertad sindical, negociación colectiva, debido proceso y derecho de defensa los que en su sentir están siendo vulnerados por la parte accionada al revocar en forma unilateral el permiso sindical que había sido conferido a la docente Gloria Cecilia Arboleda.

Como supuestos fácticos refieren que la señora Gloria Cecilia Arboleda es docente de la Universidad del Cauca y se encuentra afiliada al sindicato ASPU, que desde el año 2003 la entidad accionada le concedió permiso sindical a través de la Resolución No. DRH.0435 de 2003, y que dentro del proceso de negociación colectiva adelantado entre la Universidad del Cauca y ASPUC, se acordó que la Universidad concedería permiso sindical a los profesores que fueran elegidos en cargos de dirección nacional o en representación sindical internacional, lo que se concretó en la Resolución R-264 de 2012.

Sostienen que el permiso sindical concedido a la Doctora GLORIA CECILIA ARBOLEDA siempre estuvo acompañado de actividades académicas (docencia-investigación-proyección social) en el Alma Mater, pues cada semestre se le ha asignado labor académica en el campo de investigación y que siempre ha estado dispuesta a concertar con la Dirección de la Universidad las condiciones en que debía desarrollar el mismo.

Después de relatar las distintas actividades sindicales y académicas a cargo de la docente ARBOLEDA FERNÁNDEZ, menciona que la Universidad del Cauca mediante Resolución de rectoría R-951 de 2014 proferida el día 03 de diciembre de 2014 decidió *"suspender a partir de la fecha el permiso sindical concedido a la profesora Gloria Cecilia Arboleda"*, decisión que fue confirmada por el Consejo Superior de la Universidad el día 20 de mayo de 2015, por medio de Resolución Superior No. 024 de 2015.

La presente acción de tutela fue presentada el día 05 de junio de 2015, mediante providencia de diez (10) de junio de 2015 el Tribunal Administrativo del Cauca dispuso remitir por competencia a los Juzgados Administrativos del Circuito de Popayán la presente acción, correspondiendo por reparto a este Despacho quien conoció de la misma el día 11 de junio de 2015, y procedió a admitirla mediante providencia No. 643 de la misma fecha, ordenando las notificaciones de rigor.

## **1.2.- Contestación de la demanda**

La Jefe encargada de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad del Cauca, frente a la demanda, manifiesta que en el año 2014 el Ministerio de Trabajo certificó que la docente Gloria Arboleda no se encontraba en los registros de personas pertenecientes a las directivas de la organización de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios - ASPU y es el momento en que la administración universitaria indaga sobre el otorgamiento del permiso sindical a la Docente Gloria Arboleda y verifica la falta de requisitos, entre ellos la negociación entre las partes que determinen el objeto y el tiempo del mismo, con lo que deciden SUSPENDER el permiso sindical y procurar por el cumplimiento de los mismos.

Por otra parte, afirma que la suspensión es temporal, no es revocatoria como parece entender el Sindicato y sobre el cual se está esperando una propuesta para una concertación de las actividades, a la cual se ha negado la mencionada docente, con el argumento de que dentro de sus actividades no puede existir asignación de un curso normal en la universidad, pues es imposible ya que permanece gran parte del tiempo en la oficina de ASPUC BOGOTA y viajando por todo país.

La entidad finaliza su escrito afirmando que, con sus actuaciones, no ha violado derecho fundamental alguno y por el contrario, su actuar está conforme al procedimiento previamente establecido.

## **2.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

### **2.1.- Problema Jurídico Principal**

Conforme a la situación fáctica antes descrita, corresponde al Despacho establecer en primer lugar si la acción de tutela es procedente y, de ser afirmativa esta respuesta, determinar si la entidad demandada vulneró los Derechos Fundamentales de asociación, libertad sindical, negociación colectiva, debido proceso y derecho de defensa de la docente sindicalista **GLORIA CECILIA ARBOLEDA** al suspender el permiso sindical que había sido conferido a la docente.

### **2.2.- Problemas Jurídicos Secundarios**

(i) ¿Es procedente la acción de tutela para discutir la legalidad de actos administrativos?

(ii) ¿Consagra el ordenamiento jurídico vigente un mecanismo ordinario judicial idóneo para la protección de derechos fundamentales?

### 2.3.- Tesis

El Despacho declarará la improcedencia de la acción de tutela en el caso bajo estudio, tras considerar que si bien este mecanismo procedía de forma transitoria para la protección de derechos fundamentales cuando sean vulnerados por actos administrativos ante la presencia de un perjuicio irremediable, en la actualidad el ordenamiento jurídico colombiano consagra instrumentos judiciales provisionales que resultan igualmente eficaces para lograr ese fin, como lo son las medidas cautelares consagradas en la Ley 1437 de 2011.

No obstante, si en gracia de discusión fuera procedente este mecanismo de forma transitoria, se tiene que el permiso sindical que hace parte de los derechos de libre asociación y libertad sindical, consagra una duración periódica, según el Decreto 2813 de 2000, sin que se afecte además la prestación del servicio en este caso a cargo del ente universitario.

### 2.4.- Razones de la tesis

Para el desarrollo de la anterior tesis se explicarán los siguientes temas: **(i)** Lo probado en el proceso, **(ii)** La acción de tutela contra actos administrativos. Requisitos para su procedencia.

#### **PRIMERA.- Lo probado en el proceso**

- La ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES ASPU es una Organización Sindical de primer grado y de gremio, con Personería Jurídica No. 0623 del cuatro (4) de mayo de 1966 y actualmente se encuentra inscrita y vigente en la base de datos de Archivo Sindical del Ministerio del Trabajo (folio 23 y 24).
- La docente GLORIA CECILIA ARBOLEDA, hace parte de la Junta Directiva Principal de la ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS – ASPU, y ocupa el cargo de Secretaria General de esa asociación, según certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical el día 17 de febrero de 2015 (folio 24).
- Mediante Resolución No. DRH-0435 proferida el día 03 de junio de 2003, el Rector de la Universidad del Cauca autorizó un permiso sindical remunerado a la Docente GLORIA CECILIA ARBOLEDA FÉRNANDEZ durante 28 horas semanales equivalentes al 70% del tiempo hábil laboral, para que ejerciera las funciones y atendiera responsabilidades como miembro de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA. En la mencionada Resolución se estableció que el permiso se mantendría mientras subsistieran las condiciones que lo fundamentan, (folio 25).
- Mediante Resolución No. 351 de 03 de diciembre de 2014, el Rector de la Universidad del Cauca suspendió el permiso sindical concedido a la Docente GLORIA CECILIA ARBOLEDA FÉRNANDEZ mediante Resolución No. DRH – 435 de 2003, (folios 26-28)
- La Docente GLORIA CECILIA ARBOLEDA FÉRNANDEZ interpuso recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación contra la Resolución No. 351 del 3 de enero de 2014 (folios 32-36).

➤ La Universidad del Cauca mediante Resolución Superior No. 024 de 20 de mayo de 2015 resolvió el recurso de Apelación, presentado contra la Resolución No. 951 de 3 de diciembre de 2014, en el sentido de confirmar en todo su contenido la Resolución apelada, (folios 37-38).

➤ Requerimiento realizado por el Rector de la Universidad del Cauca al Representante Legal de la asociación sindical ASPU, donde le informa que debe enviar una solicitud de concertación con la Universidad sobre el permiso sindical asignado a la docente Gloria Cecilia Arboleda, dicho requerimiento fue realizado el día 27 de abril de 2015 y obra a folio 110 del expediente.

➤ La coordinadora del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio del Trabajo mediante oficio dirigido a la Universidad del Cauca informó que en los depósitos de juntas directivas no aparece el nombre de la señora Gloria Cecilia Arboleda Fernández, pero si aparece en la elección de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, oficio que obra a folio 111 del expediente.

Con base a lo anterior, el Despacho estudiará en primer lugar la procedencia de la acción de tutela en casos como el que se analiza.

**SEGUNDA.- La acción de tutela contra actos administrativos. Requisitos para su procedencia.**

La acción de tutela consagrada en la Carta política de 1991 se caracteriza por ser un instrumento judicial subsidiario y residual, para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, pues ante la presencia de otros mecanismos de defensa debe acudir a estos. Una interpretación contraria conllevaría a la desaparición de las acciones ordinarias para buscar la solución a conflictos jurídicos; es por ello que tanto la norma constitucional como la legal que regulan esta acción indican:

*"ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (...)"*

*"(...) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (...)"*

Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 prescribe:

*"ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:*

*1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.*

*Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización. (...)"*

Frente a este requisito el Intérprete Autorizado de la Constitución ha indicado<sup>1</sup>:

*"Esta acción se caracteriza por ser subsidiaria y residual, lo cual implica que será procedente cuando (i) no exista un mecanismo de defensa judicial o de existir no resulta eficaz para su amparo; o (ii) se promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable."*

Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en un caso concreto, el Juez está en la obligación de verificar si el actor no tiene otro mecanismo de defensa judicial **idóneo** para la protección de sus derechos o si ésta se promueve como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable, casos en los cuales sería procedente.

Por regla general, la acción de tutela es improcedente para ordenar la protección de derechos fundamentales que han sido vulnerados en un acto administrativo, ello por cuanto existen medios judiciales ordinarios de defensa, dentro de las cuales se encuentra la suspensión provisional del acto acusado con lo cual se lograría el fin que se busca a través de esta acción constitucional que como hemos venido sosteniendo se distingue por su residualidad.

En efecto, la Ley 1437 de 2011 ha dedicado todo un capítulo a las medidas cautelares procedentes en los medios de control ordinarios como el de nulidad y restablecimiento del derecho. Dicha normatividad indica:

*"Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo."*

*La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. (...)"*

El artículo 230 de la citada Ley prevé que se trata de medidas que pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, entre las cuales se incluyen:

*"1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible."*

*2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. (...)"*

**3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.**

*4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, (...)"*

*5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer." (Negrita fuera de texto)*

Se trata de una amplia gama de medidas a las que una persona puede acudir para la protección de sus derechos en un proceso ordinario, de gran similitud con las medidas que se podrían adoptar en una acción de tutela. Se destaca

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-017 de 2012. MP. María Victoria Calle Correa.

por ejemplo que, en el proceso ordinario, el Juez puede ordenar medidas tales como el restablecimiento al estado anterior a la conducta vulnerante o amenazante, o suspender **provisionalmente** los efectos de un acto administrativo, la cual guarda estrecha similitud con las órdenes que **transitoriamente** podrían hacerse en una sentencia de tutela.

Recalcando que dichas medidas proceden, según el artículo 231, luego de una simple "confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud", como puede ser, por ejemplo, cuando con un acto administrativo se avizore la vulneración de un derecho fundamental. Además, a través de la resolución de una medida cautelar puede ordenarse hasta el propio restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, para lo cual sólo se necesitan pruebas sumarias de los mismos.

Son entonces las medidas cautelares una simple solicitud del interesado, para cuyo decreto no se exige ritualidades procesales, ni probatorias estrictas que la conviertan en una medida excesiva en comparación con la acción de tutela. Es más, si el Juez advierte que la medida debe tomarse con carácter de **urgencia**, la medida puede decretarse **desde su misma presentación**, sin necesidad de agotar el trámite previsto en el artículo 233, así:

*"Artículo 234. Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. (...)"* (Negrillas fuera de texto).

Se observa así en la Ley 1437 de 2011 los efectos de la "constitucionalización del derecho", evidenciada en la consagración de instrumentos judiciales que, ante la presencia de hechos, omisiones o incluso **actos administrativos violatorios de derechos fundamentales**, permiten al Juez ordenar la suspensión de sus efectos, o incluso ordenar el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la acción u omisión.

La anterior lectura es efectuada tanto por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo como por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, así la primera de las Corporaciones citadas señala<sup>2</sup>:

*Al ejercer este medio de control, existe la posibilidad de que en la demanda se pida la suspensión provisional del acto acusado. Incluso a partir de la vigencia del C.P.A.C.A. se autoriza al juez para que desde el inicio del proceso judicial analice, previa solicitud de parte, si existe la violación que se alega, pudiendo para tal efecto: 1º) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y 2º) estudiar las pruebas allegadas con la solicitud, lo que contrasta con lo dispuesto en el estatuto anterior, en el cual era exigencia sine qua non que la oposición normativa apareciera manifiesta por confrontación directa con el acto acusado.*

*Tal mecanismo judicial es la herramienta procesal apta y expedita para la protección de los derechos fundamentales ahora reclamados, máxime si se tiene en cuenta que la medida provisional debe ser resuelta desde el auto admisorio de la demanda.*

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado sentencia del 20 de marzo de 2014 C.P. Susana Buitrago Valencia

*Corresponde entonces al juez de lo contencioso administrativo juzgar la constitucionalidad y la legalidad del acto administrativo, desde la perspectiva de la posible violación de derechos fundamentales, cuando este sea el motivo de reparo.*

*La acción de tutela no es el mecanismo indicado para ventilar este tipo de pretensiones, pues, como es sabido, se caracteriza por ser un remedio residual y excepcional. Solamente en el caso de que no exista otro medio adecuado de defensa judicial, puede el juez de tutela decidir sobre la posible violación de derechos fundamentales, a menos de que se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.*

A su vez el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en sentencia del 6 de mayo de 2013 con ponencia del Doctor Naun Mirawal Muñoz Muñoz señaló:

*Partiendo de esta base, en la actualidad, bajo el marco de la Ley 1437 de 2011, existen mecanismos idóneos ante el Juez Contencioso Administrativo para debatir los cuestionamientos planteados en el escrito de tutela, frente a las decisiones de contenido particular proferidas en sede administrativa, como lo es el medio de control establecido en el artículo 138, de nulidad y restablecimiento del derecho.*

*"Igualmente debe ponerse de manifiesto que la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", dotó a los procesos contencioso administrativos de prerrogativas que permiten la efectiva salvaguarda de derechos como el aquí invocado, relativos a la posibilidad de solicitar, bien sea, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del proceso declarativo de Nulidad y Restablecimiento del Derecho"*

Se afirma por los accionantes que la administración universitaria revocó un acto administrativo del contenido particular, sin que mediara la voluntad de la docente sindicalista a quien se la había otorgado permiso sindical; pues bien como quedó expuesto, dado que se está cuestionando la voluntad estatal, este mecanismo constitucional se torna improcedente, pues el juez natural para conocer de este conflicto es el contencioso administrativo, más aún, cuando como ya se dijo, existe hoy una amplia regulación en materia de medidas cautelares, de aplicación más flexible que la anterior normatividad procesal administrativa .

Con todo, si bien el permiso sindical es una manifestación de los derechos fundamentales a la libre asociación y de asociación sindical, debe concederse por una "duración periódica" como lo afirma la Corte Constitucional en la Sentencia de Tutela 063 de 3 febrero de 2014: "Ello sin desatender lo reglamentado en el Decreto 2813 de 2000 cuando se refiere a que el beneficio debe concederse por una "duración periódica", norma que no tiene finalidad diferente a la de evitar el abuso en el ejercicio de las facilidades que deben ser otorgadas a los representantes sindicales como componente para el goce efectivo del derecho de asociación sindical."

En la parte considerativa del acto administrativo que suspende el permiso sindical concedido a la Doctora GLORIA CECILIA ARBOLEDA FERNANDEZ, se menciona que las condiciones de la representación sindical han variado y que la Universidad del Cauca profirió la Resolución VRA 802 de 2014 en procura de equilibrar la asignación académica de la cual hace parte la docencia directa y que se hace necesario fortalecer la unidad académica a al cual se encuentra

adsrita, motivos que llevaron a tomar la decisión cuestionada, y que deberán ser objeto del pronunciamiento del juez natural.

De lo dicho para esta juzgadora, no se precisa de la intervención de juez constitucional para reanudar el permiso sindical del que goza la accionante desde hace 12 años, suspendido mediante el acto administrativo que proviene del ente estatal demandado, pues existe otro mecanismo para discutir su legalidad, a lo que se agrega que los permisos sindicales deben otorgarse por una duración periódica y sin afectación del servicio público.

### 3.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

#### RESUELVE:

**PRIMERO.- DECLARAR** improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor PEDRO HERNANDEZ CASTILLO quien actúa en calidad de representante Legal de la **ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS – ASPU** y la Doctora GLORIA CECILIA ARBOLEDA, según lo expuesto en esta providencia.

**SEGUNDO.-** Notifíquese personalmente, por telegrama o por cualquier otro medio eficaz a las partes en los términos del Art. 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

**TERCERO.-** Remítase el presente fallo a la Honorable Corte Constitucional para lo de su posible revisión, si no fuere impugnada.

**CUARTO.-** Archívese una vez llegue de la revisión de la Honorable Corte Constitucional.

#### NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

La Juez,

  
**CLAUDIA PATRICIA TEJADA RUIZ**



12

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN**  
Carrera 4ª No. 2-18 FAX (092)8209563  
Email: [j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co)

---

**Oficio No. 1620**

Popayán, 23 de junio de 2015

Señor:

**PEDRO HERNANDEZ CASTILLO**

Representante Legal ASPU.

Calle 44 No. 45-67 Unidad Camilo Torres, Bloque B3 Nivel 6

Bogotá – Cundinamarca.

**EXPEDIENTE No.**  
**DEMANDANTE:**  
**DEMANDADO:**  
**ACCIÓN: TUTELA**

**190013333008 2015-00216-00**  
**PEDRO HERNANDEZ CASTILLO Y OTRO**  
**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**

Por medio del presente oficio le notifico la sentencia No. 124 proferida el día 23 de junio de 2015, que declaró improcedente la tutela.

Se hace entrega de la providencia judicial en ocho (8) folios.

Cordialmente,



**WILLIAM HENZCER GÓMEZ GÓMEZ**  
Secretario

*firmado 24.06.15  
como Decisión 24.06.15*



Ref.  
RADICADO Nº: 19001333300820150011600  
ACCION: TUTELA  
ACCIONANTE: JHON ARIEL RESTREPO SOLARTE  
ACCIONADO: FONDO NACIONAL DEL AHORRO

En la fecha notifico el contenido de la Providencia Nº 124, mediante el cual se DECIDE la acción de tutela de la referencia, se adjunta copia de la Providencia.



Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

pfernandez@gmail.com

Asunto: NOTIFICACION FALLO DE TUTELA



124

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN**  
Carrera 4ª No. 2-18 FAX (092)8209563  
Email: [j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co)

---

**Oficio No. 1622**

Popayán, 23 de junio de 2015

Señora:

**GLORIA CECILIA ARBOLEDA**

Transversal 16 No. 16AN 36. Barrió Campamento  
La ciudad.

<b>EXPEDIENTE No.</b>	<b>190013333008 2015-00216-00</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>PEDRO HERNANDEZ CASTILLO Y OTRO</b>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>UNIVERSIDAD DEL CAUCA</b>
<b>ACCIÓN: TUTELA</b>	

Por medio del presente oficio le notifico la sentencia No. 124 proferida el día 23 de junio de 2015, que declaró improcedente la tutela.

Se hace entrega de la providencia judicial en ocho (8) folios.

Cordialmente,

  
**WILLIAM HENZCER GÓMEZ GÓMEZ**  
Secretario

*Impugno la presente  
de decisión.*

*SA Arbolada*  
34525009

*SA Arbolada*  
34525009  
24-06-2015



# ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU

Personería Jurídica No. 0623 del 4 de Mayo de 1966 del Ministerio de Trabajo  
Filial de la Internacional de la Educación IE y de la Central Unificada de Trabajadores de Colombia CUT

Señor  
Juez Octavo Administrativo de Popayán  
Carrera 4ª No. 2-18  
Su Despacho.

205-216

JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO	
POPAYÁN CAUCA	
RECIBIDO	
FECHA	25 JUN 2015
HORA	10:25 a.m.
FOLIO	1FE

Yo, PEDRO HERNÁNDEZ CASTILLO, colombiano, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparezco al pie de mi firma, Presidente Nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), manifiesto a usted muy comedidamente, que confiero PODER ESPECIAL amplio y suficiente en derecho al Doctor CAMILO ANDRES VALDERRAMA VARGAS, colombiano, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 83.211.895 de Timaná, Abogado Titulado y en ejercicio, con tarjeta Profesional No. 199320 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación, instaure recurso o impugnación contra fallo de Acción de Tutela que expida su despacho, tutela entablada contra UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por la violación flagrante de mis derechos humanos fundamentales y constitucionales, entre otros, el Derecho de Asociación, Libertad Sindical, Negociación Colectiva, Debido Proceso y Derecho de Defensa.

En consecuencia, mi apoderado queda facultado para formular el recurso o impugnación respectiva contra el fallo de Acción de Tutela, tramitarla y llevarla hasta su terminación en segunda instancia e inclusive insistencia de revisión por ante la Sala de Revisión de la Honorable Corte Constitucional, por la flagrante, reiterada y sostenida vulneración de mis derechos y prerrogativas, por cuenta de accionado.

Mi apoderado, además de las facultades expresamente consagradas en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil de Colombia vigente, está plenamente facultado para: Conciliar, recibir, firmar en mi nombre, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir, denunciar, cobrar, reclamar sus honorarios profesionales a quien corresponda, proponer incidentes, solicitar y aportar pruebas, pedir investigaciones, exigir el reconocimiento y pago de perjuicios materiales y morales; en general, podrá realizar todos aquellos actos y diligencias absolutamente necesarios para el cumplimiento de su gestión.

Señor Juez sírvase reconocerle personería sustantiva y para actuar a mi apoderado para, que ejerza sus funciones y cumpla fielmente con el presente mandato oneroso.

De usted con el debido respeto

Atentamente,

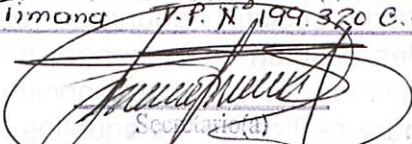
Pedro Hernández Castillo  
C.C No. 19.158.623.  
PRESIDENTE NACIONAL DE ASPU

Acepto,

Camilo Andrés Valderrama Vargas  
C.C No. 83.211.895  
TP. No. 199320 del Consejo S.J





JUZGADO DE FAMILIA RATIVO  
MUNICIPIO DE LA  
El anterior es el \_\_\_\_\_, actuando personalmente  
ante el suscrito Secretario(a),  
Hoy 25 de Junio de 2015  
Por su(s) signatario(s) Camilo Andres  
Valdeirama Vargas  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Quien exhibió(eron) su(s) C.C. N°(s) 83.211.895  
Exp Timonay T.P. N° 199.330 C.S.J.  
  
Secretario(a)